

Considerando; que no hay la violacion de garantía que ha invocado Silvestre Solis, pues consta que con su voluntad y conforme á un decreto del Estado de Jalisco, entró al servicio de las armas desde Abril del año próximo pasado, sin que contra éste hecho, ni contra el documento que lo justifica, ni contra el tiempo que ha trascurrido, haya objetado cosa alguna; con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve:

Primero; es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Guadalajara, fecha 30 de Junio último, por la que declara que la justicia de la Union no ampara ni protege á Silvestre Solis, por no aparecer de autos se haya violado en su contra alguna garantía constitucional.

Segundo; el Juez de Distrito, pasará al Juez competente las constancias relativas al escrito de fojas 7 y fecha 22 de Abril de éste año, presentado á nombre del quejoso y desconocido por él, para que proceda como corresponda si hay delito de falsedad.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos respecto del primer punto y por unanimidad respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejeda*.—*Pedro Ogaszon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*J. M. Lafragua*.—*P. Ordaz*.—*M. Auza*.—*S. Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José Garía Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias, México, Julio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno. Lic. *Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guadalajara por el C. Lic. Francisco Eulogio Trejo, como defensor de Antonio Contreras, Victoriano Ponce y Juan Leon, contra el C. Gefe político de Colima, encargado por el Juez de 1ª instancia del ramo de lo criminal de esa Ciudad, de ejecutar en ellos la pena de muerte.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez.

El Gefe superior de Hacienda en el Estado, en ejercicio de la promotoria fiscal, dice: que ha examinado con detenimiento el juicio de amparo promovido por los reos Antonio Contreras, Victoriano Ponce y Juan Leon, así como el informe justificado que ha rendido el Prefecto político de esta capital.

Varias son las cuestiones que se presentan sobre las infracciones de artículos constitucionales, conforme al escrito presentado por los reos mencionados; pero el que habla, no cree necesario tocar esta materia, por que en su concepto por otro principio, no ha lugar al amparo que se solicita.

Efectivamente, y conforme á la sentencia que en copia remitió la autoridad política, se ve desde luego que se trata de un negocio judicial, resuelto por un tribunal competente y establecido conforme á las leyes y á las prescripciones constitucionales. El art. 8º capítulo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869 sobre amparo de garantías, prescribe terminantemente, que no es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales, y por lo mismo, tratándose en el presente caso de un negocio judicial, no puede proceder el amparo solicitado.

El que suscribe, enemigo de la pena de muerte, desearía emitir otra opinion; pero su deber no le permite otra cosa que suje-

tarse estrictamente á los mandatos de la ley, y por lo mismo pide que sea desechado el recurso interpuesto, en virtud de las razones expresadas.

Tal es mi opinion que sujeto á la ilustrada justificacion del Juzgado que tiene que resolver sobre este negocio.

Colima, Abril veinticinco de mil ochocientos setenta y uno. (firmado).—*Guillermo Llano*.

Sentencia del Juez de Distrito.

Guadalajara, Junio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos.

El C. Lic. Francisco Eulogio Trejo, defensor de Antonio Contreras, Victoreano Ponce y Juan Leon, pidió á este juzgado amparo de garantías en favor de sus defensos, mediante telégrama que de Colima se recibió en esta capital á 18 de Abril último, y contra el prefecto de aquella ciudad, que al día siguiente iba á fusilarlos violándoles la garantía que otorga el art. 23 de la Constitucion federal; el quejoso apoyó su ocurso en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. (Documento telegráfico corriente á fojas 20 de estos autos.)

Este juzgado mandó suspender la ejecucion por auto telegráfico de la misma fecha, comisionando al juez 2º de 1ª instancia de Colima para que mandara suspender la ejecucion, sustanciara el juicio de amparo y diera cuenta. (Telégrama que encabeza este expediente.)

El juez comisionado cumplió el mismo día con lo dispuesto por este juzgado, mandando suspender el acto reclamado.

Al día siguiente, 19 de Abril, formalizó por escrito, el defensor, el recurso de amparo ante el juez 2º de 1ª instancia mencionado, exponiendo que sus defensos Antonio Contreras, Victoreano Ponce y Juan Leon habian sido sentenciados en una sola

instancia á pena de muerte, por robo con violencia, conforme á una ley del Estado de Colima de fecha 24 de Marzo de 1868: que en aquella única instancia se les habia limitado la defensa, sin concederles prueba, violándoles así las garantías que otorgan las fracciones 4ª y 5ª del artículo 20 de la Constitucion; y que no siendo sus defensos saltadores de caminos, se los violaba la garantía del art. 23 y las de las fracciones antes citadas. Concluyó apoyando su ocurso en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 69 citada.

Pedido informe con justificacion al prefecto executor del acto, rindió el que se vé á fojas 6, acompañando por justificante de su conducta un testimonio de la sentencia, que se registra de la foja 7 á la 10, que es la de muerte.

Oida la voz fiscal, mediante el traslado correspondiente que se corrió al Gefe superior de Hacienda de Colima, que allá hace veces de Promotor, se recibió el negocio á prueba y el defensor rindió la testimonial que corre de la foja 15 á la 17.

Ya en estado de sentencia, los autos vinieron á este juzgado con citacion para fallar en definitiva, con cuyo objeto se tienen hoy á la vista.

Del contesto de todas las constancias judiciales que forman el expediente, resulta: Que Victoreano Ponce, Antonio Contreras y Juan Leon iban á ser fusilados por el prefecto de Colima, como lo aseguró el defensor de los quejosos en su telégrama de 18 de Abril y ocurso de 19 del mismo mes. El oficio corriente á fojas 5 firmado por dicho prefecto, y el informe rendido por este que obra á fojas 6, prueban que esa autoridad iba á ejecutar la sentencia de muerte, cuyo acto reclamado suspendió la órden de este juzgado, aunque en concepto del expresado prefecto no habia violacion en la ejecucion de la sentencia, como lo demuestran sus mismas palabras, que en el segundo párrafo de su informe son, literalmente, las siguientes: "Si ha habido, pues, viola-

ción de garantías, yo no lo sé, á no ser que se entienda como tal la ejecución de una sentencia pronunciada en toda forma por un juez que tiene por la ley el derecho de juzgar." Estas palabras y la sentencia á que se refieren, la cual tenía á la vista el prefecto, prueban la violación reclamada, pues que dicha sentencia manifiesta por sí misma que fué pronunciada en una sola instancia, y que recayó sobre robo violento; mas no cometido por salteadores de caminos, cuya calidad no está probada, y sí desmentida por la misma sentencia y por la prueba testimonial recibida en este juicio. Este juzgado Considerando:

Primero; Que la calificación de salteadores de caminos debe consistir en hechos que prueban esa calidad, los cuales hechos deben ser real y verdaderamente los de salir á los caminos los ladrones, para robar á los pasajeros, según la significación genuina y jurídica de las palabras, conforme á los diccionarios de la lengua y de legislación.

Segundo; Que solo atormentando el texto de la ley y la significación propia y recibida de las palabras, se puede dar á estas otra significación diferente ó diversa, contra los preceptos constitucionales.

Tercero; Que solo indebidamente se pueden denominar salteadores de caminos á los que estos andan y pasajeros á los que no pasan por ellos.

Cuarto; Que no teniendo los quejosos, de que ahora se trata la calidad de salteadores de caminos, debió juzgárseles con el pleno conocimiento de causa que las leyes proscriben, sin denegarles la prueba que solicitaron para su legítima defensa, con cuya denegación se violaron las garantías que otorgan las fracciones 4ª y 5ª del art. 20 de la Constitución general; y por habérseles sentenciado á pena de muerte, se les violó también la garantía que otorga el art. 23 de la misma Constitución; por tanto y con fundamento de los artículos 1º, 101, 102, y 126 de la expresada Constitución,

este juzgado falla con las proposiciones siguientes:

Primera. La justicia de la Unión ampara y protege á Victoreano Ponce, Antonio Contreras y Juan Leon contra el prefecto de Colima, por la violación de garantías que se ha mencionado.

Segunda. Notifíquese esta sentencia, publíquese en los periódicos y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión.

El Juez 1º de Distrito, etc.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 24 de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juez de distrito de Guadalajara y Colima por el C. Lic. Francisco Eulogio Trejo, como defensor de Antonio Contreras, Victoreano Ponce y Juan Leon, contra el C. Gefe político de Colima encargado por el juez 1º de 1ª instancia del ramo de lo criminal de esa ciudad de ejecutar en los referidos Contreras, Ponce y Leon la pena de ser pasados por las armas, á que ese juzgado los condenó, por haber robado de noche la casa de Pedro Carrisales que se halla aislada á cosa de un cuarto de legua del pueblo de Comalá, ejerciendo violencia en la persona de Carrisales, y considerando: que el delito de que se trata no es el de asalto en camino, ni otro alguno de los que el artículo 23 de la Constitución federal permite que pueda castigarse con pena de muerte; y que por lo mismo se ha violado en la persona de los defendidos por el C. Lic. Francisco Eulogio Trejo, imponiéndoles la pena capital, la garantía á que se refiere el artículo constitucional citado; se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 24 de Junio último, por el juez de distrito de Guadalajara que declara: que la justicia de la Unión ampara y protege á

Victorcano Ponce, Antonio Contreras y Juan Leon, contra el prefecto de Colima por la violacion de garantías que se ha mencionado.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peraltá*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Fortunato Vega y Compañía, contra la Tesorería del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

Los Sres. F. de la Vega y compañía piden amparo porque la Tesorería del Estado, les exigió el pago de \$ 232, 50 cs. por derechos de mercado correspondientes á 265 (doscientos sesenta y cinco) bultos de mercancías extranjeras nacionalizadas que á su consignacion condujeron dos buques nacionales; manifiestan, que la Tesorería para este cobro se fundó en el decreto del Gobierno del Estado de 31 de Enero de 1870; decretó que invado las atribuciones del po-

der federal. Se ve, pues, que el amparo pedido se hace consistir en que el Gobierno y el Tesorero su ejecutor, han violado el artículo 101 de la Constitución federal en su fracción 3ª.

Segun lo expuesto, no toca al fiscal el exámen sobre la justicia ó injusticia que encierre el decreto de 31 de Enero, sino única y exclusivamente examinar si se ha violado el pacto federal de la Nación, ó en otros términos, si el Estado de Sinaloa ha usurpado atribuciones del poder federal.

El principal fundamento de la demanda se hace valer en el artículo 72 de la Constitución fracción 9ª. Ella dice que el Congreso tiene facultades para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan retribuciones onerosas.

Observa el fiscal, que el artículo constitucional despues de hablar del comercio extranjero habla del de Estado á Estado, con lo cual quiso significar el comercio de efectos producidos en el mismo país, quiso igualar á estos en derechos; mas no con los que vienen del extranjero, que aunque nacionalizados, de allí vienen.

Se dice en la demanda, que la ley de 2 de Mayo de 1868, es un corolario del artículo constitucional citado. El fiscal se limita á decir que esa cita es contraproducente, por que la ley habla de los frutos de otros Estados y los efectos nacionalizados no son frutos del país sino extranjeros.

El otro apoyo de la demanda está en la fracción 1ª del art. 112 de la Constitución; pero advierte el fiscal que el Gobierno del Estado solamente ha impuesto un derecho de mercado y no de importacion como consta del decreto de 31 de Enero á que se refieren los solicitantes y que obra en autos.

Tal vez ese decreto sea injusto y desnivelo el comercio, pero no para toda injusticia ni ley que desnivelo el comercio, se es-